



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0120/2017

FECHA: 23 de octubre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0120/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito registrado en el Ayuntamiento de Avilés -Principado de Asturias- el 20 de marzo de 2017 la ahora reclamante solicitó, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la siguiente información:

Documento de la estrategia "DUSI" presentado por este Ayuntamiento a la convocatoria del Plan general así como conocer el extremo de si fue redactado por los propios funcionarios del Ayuntamiento o por una consultoría externa. En ese último caso, quiero conocer el importe al que ascendió el servicio prestado.

Mediante comunicación de 30 de marzo de 2017 de la Alcaldesa de Avilés, se "autoriza la consulta al expediente administrativo electrónico por el órgano competente", indicando a la ahora reclamante "que, el plazo para el ejercicio del derecho de acceso y consulta es de DÍEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la autorización de acceso y consulta. En el supuesto de que transcurra el plazo referido, sin ejercicio de su derecho, se

ctbg@consejodetransparencia.es



entenderá desistido en el mismo debiendo solicitar nueva petición de acceso y consulta”.

Frente a esta autorización la interesada interpone, al amparo del artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación mediante escrito registrado en esta Institución el 11 de abril de 2017. En concreto, señala que en supuestos análogos en los que ha solicitado Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible -EDUSI- este documento se encuentra publicado en la correspondiente web municipal -Ayuntamiento de Madrid- o no ha habido ningún problema en remitirle vía electrónica y en formato electrónico el documento de referencia -Ayuntamiento de Mieres-. Considera que no resulta de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- la “autorización” para ver un “expediente” otorgándole un plazo de 10 días para ello, concluyendo que la EDUSI no es un expediente administrativo ni tiene tal categoría.

2. Por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, el 11 de abril de 2017 se trasladó el expediente de referencia, por una parte, a la Dirección General de Participación Ciudadana de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado de Asturias para conocimiento y, por otra parte, al Ayuntamiento de Avilés a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizarse.

Mediante escrito registrado el pasado 8 de mayo de 2017 en esta Institución, la Alcaldesa-Presidenta remite las alegaciones que, en síntesis, pueden sistematizarse como sigue:

- El 20 de marzo de 2017 se recibe a través de ORVE la solicitud de acceso a la información de la ahora reclamante, incorporándose por el registro general de forma errónea al expediente AYT/1182/2017 relativo a la contratación de servicios de apoyo a la implementación del DUSI, respondiendo mediante aviso AUPAC que la aportación debería ser incorporada al expediente AYT/5089/2015 que contiene la información solicitada.
- Tras comprobar que la solicitud no incurre en causa de inadmisión del artículo 18 de la LTAIBG, el 29 de marzo se firma por la Alcaldesa-Presidenta Diligencia-Autorización para el examen del expediente. El siguiente 30 de marzo de 2017 la Alcaldesa-Presidenta firma el oficio mediante el que se comunica a la interesada que se ha autorizado el examen del expediente y que éste se encuentra a su disposición para su consulta durante diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la notificación del citado oficio, así como las oficinas en las que debe dirigirse para hacer efectiva la consulta previa obtención de la oportuna credencial, por tratarse un expediente electrónico.
- La ahora reclamante accede a la notificación a través del Buzón de Notificaciones de la Sede Electrónica Municipal el 6 de abril. El siguiente 7 de



abril se atiende una llamada telefónica en la que se le explica que ha de personarse en la oficina indicada en el oficio de 30 de marzo y que podrá acceder al expediente para el que fue autorizada a través de un puesto destinado a este efecto, previa obtención de la oportuna credencial, pudiendo tomar cuantas notas considere convenientes.

- El 10 de abril la ahora reclamante accede toda la información del expediente, tal como queda constancia en el documento AUPAC CON11IOKN obrante en el expediente 5089/2015, señalándole expresamente el documento AUPAC que se corresponde con la estrategia DUSI de este Ayuntamiento, así como el Decreto de adjudicación del contrato de servicios para la elaboración de dicho documento, en el que consta su coste, indicándole a la pregunta sobre la obtención de copias de los documentos interesados, que éstas habrían de ser solicitadas en nueva instancia y abonadas con carácter previo a su entrega.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en



el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de lo previsto en el artículo 24.6 de la LTAIBG, en relación con el apartado 2 de su Disposición adicional cuarta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana) han suscrito un Convenio para el traslado a este Consejo del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 LTAIBG en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Tal y como se deduce de los antecedentes sumariamente reseñados, el fondo del asunto que se plantea en la presente Reclamación está relacionado con la formalización de las solicitudes vinculadas con el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Según ha quedado acreditado en el expediente, la ahora reclamante formuló una solicitud de acceso a la información relacionado con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible del municipio de Avilés y la administración municipal considera que el acceso a dicha información ha de realizarse en unas concretas oficinas municipales, en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la notificación del oficio de autorización del examen del expediente y obtener la oportuna credencial por tratarse un expediente electrónico.

Podemos advertir desde ahora que la presente reclamación ha de estimarse por los motivos que se desarrollan a continuación.

4. Con carácter preliminar, conviene recordar que la LTAIBG regula el ejercicio del derecho subjetivo de acceso a la información en un sentido muy amplio, configurándose los límites al mismo como una excepción que debe justificarse motivadamente. Esta afirmación que se deduce del Derecho Positivo -claramente de la determinación de los titulares del derecho, “todas las personas”, que se lleva a cabo en el artículo 12 y del amplio concepto de “información pública” que se contempla en el artículo 13- ha sido reiteradamente sostenida por la jurisprudencia dictada con relación a la LTAIBG.

En efecto, recordemos a estos efectos que la Sentencia nº 85/2016, de 14 de junio, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, en su Fundamento de Derecho Tercero, tras reproducir diferentes pasajes del preámbulo de la LTAIBG, afirma que «la finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñada Ley, es un acceso amplio a la información pública; y los límites a tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo razonado, restrictivo y aquilatado a tenor del llamado, test de daño». En un sentido similar, en el Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia nº 145/2016, de 28 de octubre de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, se



indica que la Ley de Transparencia estatal «parte de un derecho amplio y extenso de acceso a la información pública, lo que conlleva que la limitación a tal derecho ha de realizarse a tenor de una interpretación estricta y restrictiva». Mientras que, finalmente, en los Fundamentos de Derecho Cuarto y Sexto de, respectivamente, las Sentencias nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid y nº 39/2017, de 22 de marzo de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid, se afirma que el derecho de acceso a la información pública «no puede tratarse de una potestad discrecional desde el momento en que, como se ha dicho antes, la ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurren causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14».

Tratándose de un derecho de amplio espectro, resulta lógico que el propio legislador básico estatal se haya preocupado de regular con cierto detalle sus garantías. Entre ellas, además de la evidente acción procedimental del artículo 24, destaca la regulación que a propósito de la formalización del acceso se prevé en el artículo 22 de la LTAIBG.

El apartado 1 de dicho precepto establece la regla general de que “[e]l acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica”, añadiendo a continuación dos excepciones a esta regla: cuando ello no sea posible o bien cuando el solicitante haya señalado expresamente otro medio. En el caso que ahora nos ocupa, la ahora reclamante consignó expresamente en su escrito de solicitud de acceso a la información de 17 de marzo de 2017 que la notificación y consecuente recepción de la información solicitada fuese realizada a través de correo postal. Ello significa, en suma, que la formalización del acceso a la información pública no está condicionada a la vista de la misma por un periodo de 10 días en unas oficinas municipales según ha aseverado el ayuntamiento de Avilés. Los términos de la Ley de Transparencia son claros a este respecto, no precisando de operaciones hermenéuticas complejas: el acceso debe realizarse en formato electrónico y, en su defecto, en la forma que haya designado el solicitante, en el caso que nos ocupa, a través de correo postal.

Cuestión distinta es el formato en que se traslade al solicitante la información solicitada, dado que, según se desprende del artículo 22.4 de la LTAIBG, si bien el acceso es gratuito, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa local que resulte de aplicación.

Procede, en suma, estimar la reclamación planteada por la ahora reclamante por cuanto no se ha aplicado correctamente por el Ayuntamiento de referencia las previsiones contenidas en el artículo 22.1 de la LTAIBG.

5. En otro orden de cosas, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera necesario destacar la necesidad de avanzar en la realización de buenas prácticas por parte de los ayuntamientos e ir cumplimentando las diferentes



obligaciones previstas por la LTAIBG. En este sentido, cabe poner de manifiesto que según se desprende del artículo 5.1 de la LTAIBG, desde el 10 de diciembre de 2015 los Ayuntamientos están obligados a publicar “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. De este modo, se puede sostener razonablemente que la denominada Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible constituye un supuesto de información de carácter institucional, organizativo y de planificación de las previstas en el artículo 6.2 de la LTAIBG que debe ser publicada de oficio por las entidades enumeradas en el artículo 2.1.a) de la LTAIBG, entre las que se encuentra los Ayuntamientos.

El precitado artículo 6.2 de la LTAIBG prevé que las distintas administraciones públicas, a través de alguno de los medios previstos en el artículo 5.4 de la LTAIBG, publicarán “los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente”.

El cumplimiento de estas obligaciones legales por parte de la administración pública no excluye, por supuesto, que cualquier persona pueda solicitar el acceso a esa información, optando en tal caso la administración por remitir al solicitante, bien a la dirección URL en la que se encuentra publicada la misma, bien copia de la información de que se trate. En este sentido, hay que recordar que, con relación a este asunto, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha elaborado el Criterio Interpretativo CI/009/2015, de 12 de noviembre, [disponible en la web institucional del Consejo http://www.consejodetransparencia.es/ct/Home/consejo/criterios_informes_consultas_documentacion/criterios.html] en el que se concluye afirmando que “parece claro que no debe limitarse o restringirse el ámbito del derecho de acceso de los ciudadanos exclusivamente a las informaciones o datos que no estén sometidos a publicidad activa. Las obligaciones en esta materia conciernen a la Administración y no delimitan ni prejuzgan en modo alguno el derecho de acceso a la información que asiste a los ciudadanos. Antes bien, se hallan al servicio de ese derecho precisamente, para facilitar su ejercicio, abreviando la vía de acceso de los interesados a los datos o informaciones que necesiten”.



III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede

PRIMERO.- ESTIMAR la Reclamación presentada, por entender que el Ayuntamiento de Avilés no ha aplicado correctamente el artículo 22.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para resolver las solicitudes de acceso a la información.

SEGUNDO.- INSTAR al Ayuntamiento de Avilés -Principado de Asturias- a que en el plazo de quince días facilite la información solicitada por la ahora reclamante en los términos del Fundamento Jurídico 4 de esta resolución y, asimismo, a que en igual plazo traslade a este Consejo copia de su cumplimiento.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Esther Arizmendi Gutiérrez

